

Señor Intendente Municipal de VLA

Javier MURER
S / D

Ref.: Solicitud de Audiencia Pública –

Art. 303 Carta Orgánica Municipal

Oportunamente los 545 vecinos y vecinas de Villa la Angostura, representados procesalmente por los Dres. **Silvana GORDILLO y Guillermo A HENSEL**, habiendo acreditado más del **tres por ciento (3%) del padrón electoral municipal**, y conforme lo dispuesto por el **artículo 303 de la Carta Orgánica Municipal**, nos dirigimos a Usted a fin de **solicitar reconsideración la Audiencia Pública.-**

Ello con el objeto de **TRANSPARENTAR Y QUE UD PUEDA JUSTIFICA**, técnica y legalmente el **DAÑO AMBIENTAL Y PATRIMONIAL**, debido al **cambio de DESTINO de dominio público a privado y cambio de uso del Espacio Verde público identificado como [LOTE 1 MANZANA 13 ESPACIO VERDE, denominado catastralmente 16-20-070-1994-000 de 39.145,52 mts2]**, cuyo destino se encuentra alterado en contravención a las disposiciones del **Código Urbano Municipal**, (Ord 2659) las **normas de preservación ambiental vigentes y la Carta Magna de VLA (COM)**, tanto por las **Ordenanzas N° 4275/25 y 4289/25**, ambas nulas de nulidad absoluta.-

I. INEXISTENCIA DE ARGUMENTO JURÍDICO DEL RECHAZO

1. Arbitrariedad por falta de fundamentación suficiente

El rechazo resulta **arbitrario**, en tanto:

- No realiza un análisis **concreto, razonado y circunstanciado** de los argumentos expuestos.
- Se limita a una **afirmación dogmática**, sin explicar **por qué** los derechos invocados no merecen tutela.
- Prescinde de ponderar los intereses en juego, incumpliendo el deber de motivación de los actos administrativos y judiciales.
- Niega a justificar el daño ambiental y patrimonial que pretende ejecutar.-
- Impide a la sociedad conocer los argumentos del ilícito que pretende avanzar.-

Conforme doctrina y jurisprudencia constante, **la ausencia de fundamentos reales convierte al acto en nulo**, por violar el debido proceso y el principio republicano de motivación de los actos de gobierno.

2. Falacia jurídica del “cambio de uso de hecho”

El rechazo se apoya en una **categoría inexistente en el ordenamiento jurídico**: el denominado “*cambio de uso de hecho*”.

No existe en el derecho administrativo, ni urbanístico argentino la posibilidad de modificar usos del suelo:

- Sin acto administrativo expreso,
- Sin procedimiento,
- Sin audiencia pública,
- Sin ordenanza,
- Sin evaluación ambiental,
- y sin control de legalidad.

El uso del suelo **no se adquiere por tolerancia, por costumbre, por el paso del tiempo, ni hechos consumados**, sino **únicamente por acto administrativo legal válido**.

Aceptar esta “teoría-tesis” implica:

- Legitimar la **vía de hecho administrativa**,
- **Desprecio** por el proceso administrativo.-
- Vaciar de contenido, obligatoriedad y cumplimiento las normas urbanísticas,
- Consagrar la **arbitrariedad estatal**.
- **Daños** de hecho irreversible.-

3. Violación del principio de legalidad y tipicidad administrativa

El rechazo desconoce que:

- Toda restricción de derechos debe surgir de una **norma previa, fundamentos, expresa y válida**.
- El Estado **no puede crear categorías fácticas para justificar decisiones restrictivas**, debe ampararse en el DERECHO, sino es arbitrario.

El “cambio de uso de hecho”:

- No está tipificado,
- No tiene procedimiento,
- No existe administrativamente
- No tiene efectos jurídicos reconocidos,
- y carece de control institucional.

Esto vulnera directamente:

- El principio de legalidad,
- La seguridad jurídica,
- El Estado de derecho
- y la confianza legítima del administrado.

5. Desconocimiento del derecho a la participación y a la audiencia pública

El rechazo también vulnera:

- El derecho a ser oído,
- El principio de participación ciudadana,
- Los estándares de democracia ambiental.

La negativa a habilitar instancias de diálogo o audiencia:

- Clausura el debate público,
 - Daña la Transparencia de las decisiones administrativas
 - Transforma una decisión administrativa en un acto autoritario, oscuro e ilegal
 - y excluye a la comunidad de decisiones que afectan su entorno.
-

II. CUESTIONAMIENTO SOCIAL E INSTITUCIONAL

1. Impacto en la confianza ciudadana

Desde una mirada social, el rechazo transmite un mensaje grave:

- que las decisiones se toman **sin escuchar**,
- que los hechos consumados y de hecho valen más que la ley,
- que el ciudadano solo es admitido cuando no cuestiona.

Esto **erosiona la legitimidad institucional** y **profundiza la desconfianza en su Gestión Municipal**.

2. Normalización de privilegios y desigualdad

Aceptar un “**cambio de uso de hecho**” implica:

- favorecer a quien incumple,
- perjudicar a quien respeta la norma,
- consolidar situaciones irregulares en detrimento del interés general.

No hay igualdad ante la ley si:

- unos deben cumplir procedimientos,
- y otros consolidan derechos por mera tolerancia estatal.

3. Afectación del interés colectivo y del desarrollo ordenado

El rechazo desconoce que:

- El ordenamiento territorial no protege intereses individuales,
- Sino el **bien común, el ambiente y la calidad de vida urbana**.

Cada decisión arbitraria:

- Genera precedentes peligrosos,
- Habilita futuros conflictos,
- debilita la planificación urbana.
- Perjudica la confianza social.-
- Daña el entramado del contrato social

III. COROLARIO

El rechazo cuestionado:

- es jurídicamente **arbitrario**,
- se apoya en una **falacia normativa**,
- vulnera derechos constitucionales,
- y socialmente consolida un modelo de gestión Municipal **cerrado, ilegal, poco transparente y desigual**.

Por ello, corresponde:

- su **revocación**,
- el levantamiento de las costas o su imposición por su orden,
- y la apertura de instancias reales de diálogo y control legal.

Patrocinando el presente petitorio firman digitalmente los abogados los ex convencionales y ex concejales, saludamos atentamente.

Dra Silvana Gordillo

Dr Guillermo Hensel.-